

Crece ofensiva empresarial

Aunque ninguna lo señala con su nombre, utilizando como referencia el cliché de “populista”, está creciendo la ofensiva de los grandes corporativos contra el candidato presidencial de la coalición que encabeza Morena, Andrés Manuel López Obrador, vía la inducción, a título de “orientación” del voto en su contra de cara a sus trabajadores. Desnudada una primera carta abierta a los trabajadores de Aeroméxico, a la lista se eslabonó la productora y distribuidora de utensilios domésticos Vasconia, y ahora el Grupo Herdez y Fomento Económico Mexicano (FEMSA).

Las cartas de tinte paternal recogen el discurso priista que apunta a un regreso al pasado, sólo que poniendo el énfasis en los sexenios encabezados por Luis Echeverría y José López Portillo, la letra gorda colocada en devaluaciones y expropiaciones. “Los efectos”, dice el mensaje del presidente de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal, “fueron catastróficos. Tuvimos devaluaciones de más de 100% tanto en 1976 como en 1982. Muchos mexicanos perdieron sus empleos y a la mayoría de todos nos redujeron nuestros ingresos de manera muy relevante”.

Durante el último tramo del gobierno echeverrista se rompió el largo periodo de 12.50 pesos por dólar, para saltar de golpe a 23... en un escenario de enfrentamiento con los empresarios de Monterrey, quienes culpaban al Ejecutivo del asesinato del patriarca de las empresas, Eugenio Garza Sada. Conocido como El Diablo por la forma de sus cejas, Fernández Carbajal es yerno de Eugenio Garza Lagüera, ya fallecido. El imperio de FEMSA abarca la principal producción de Coca-Cola en el país, con ramificaciones en Centro y Sudamérica, además de la cadena de tiendas OXXO y centenares de farmacias.

En su misiva se alude también a la expropiación bancaria decretada por López Portillo, que incluyó a Serfin, del que el entonces grupo Visa era socio. “El segundo brazo más importante que tenía nuestro grupo”, dice. A los dos gobiernos de corte priista se les califica de populistas, con inclinaciones a una mayor participación del Estado en la economía, política salarial y manejo indisciplinado del gasto del gobierno.

A su vez, en carta similar a los trabajadores, el presidente del Grupo Herdez, Héctor Hernández-Pons, va más allá al pronosticar que éstos tendrían un deterioro en su patrimonio, sugiriéndoles tomar las medidas contundentes. La inducción vía el miedo. Hernández-Pons señala letra por letra que “en la medida en que estén mayor preparados para afrontar cualquier giro que pueda presentarse en la economía del país como escenario de las próximas elecciones, o que provenga del exterior, podrían proteger a la empresa”.

Tras aludir a Echeverría y López Portillo como detonantes de devaluaciones, inflación de hasta 90%, control de cambios, precios controlados y nacionalización

de la banca, explicación al calce de cada capítulo, el empresario advierte que la empresa será más cautelosa con sus inversiones. “Así como me preocupa el bienestar de nuestra querida empresa, finaliza, me preocupa el de ustedes y sus familias”.

En el caso del presidente del Grupo Vasconia, José Ramón Elizondo, la comunicación la realizó vía un video en el que habla de razonar el voto “para que gane un candidato bien preparado que preserve lo bueno y que mantenga su vista al frente”. El empresario también habla de haber limitado inversiones. La Coparmex decía que era falsa la inducción de empresarios al voto.

Balance general. Colocadas como la panacea para estimular el crecimiento inmobiliario, las llamadas fibras, alimentadas con colocaciones de papeles de deuda, se están resquebrajando. La alerta de los expertos habla de indigestión sobre todo en el ramo de centros comerciales. En la zona sur de la Ciudad de México la concentración es evidente, en un escenario en que las rentas aumentan y las compras escasean. De hecho, la mayoría de los papeles colocados han reducido su precio de adquisición ante la sobreoferta. El caso más dramático es de la Fibra Shop, cuyo valor de sus bonos se ha reducido 43%, lo que ha producido una alerta por parte de la Afore Sura, quien tiene una participación importante vía los ahorros para el retiro de los trabajadores afiliados. La instancia decidió vender una de sus filiales, denominada el Asesor, que representaba 40% de sus activos.

EMPRESA DE ALBERTO BARRANCO. Mayo 25 del 2018

Alto a la inseguridad

Colocada en el común denominador de las promesas de los candidatos a la Presidencia de la República, acabar con la impunidad: la tarea parece titánica y cara al arraigo: México está colocado en el cuarto escalón de los 10 países con mayor incidencia. Nos superan sólo Filipinas, India y Camerún. En la ruta Del nada para nadie, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en 2016 se cometieron 31.1 millones de delitos asociados a 24.2 millones de víctimas.

La tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes fue de 37 mil 17, frente a la de 2015, que alcanzó 35 mil 492. Y aunque la constante en el país es omitir denuncias ante la falta de resultados o el temor de represalias, en 2017 llegaron al Ministerio Público 1.8 millones. Las cifras se inscriben en un volumen de título sugestivo. Cómo poner un alto a la inseguridad en México. Cinco propuestas para tranquilidad de la ciudadanía. Su autor, Alejandro Desfassiaux, es presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, con una trayectoria de más de 30 años en la materia.

Las recetas oscilan desde revivir la Secretaría de Seguridad Pública, desmantelada en el actual sexenio, lo que automáticamente desaparecería la Comisión Nacional de Seguridad y dejaría sin tutela en el tema a la Secretaría de Gobernación, hasta

la creación de un Colegio Nacional de Oficiales y Mandos de la Policía Federal... En el desglose de los puntos, en el regreso de la Secretaría de Seguridad Pública se deslindaría al Ejército y la Marina de funciones ajenas a las previstas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea.

Mientras la actual estrategia habla de revisar la compatibilidad moral de los cuerpos policiacos, la alternativa sugiere capacitarlos en consonancia, por ejemplo, con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. El entrenamiento sería uniforme. En el caso de la evaluación de "rentabilidad", se habla de un costo actual equivalente al 4% del PIB. Reducirlo obligaría a premiar o castigar a los mandos en relación con determinadas metas.

El capítulo de cero tolerancia habla de involucrar el combate al lavado de dinero. Así, en la Plataforma México se colocaría un software ligado al Servicio de Administración Tributaria, Sistema Financiero y aún el IMSS y el ISSSTE, para ubicar un retrato integral de algún infractor. Bajo el esquema se llevaría un registro de todos los movimientos financieros de las personas. La alternativa apunta también a crear un Sistema Nacional de Prevención y Reinserción Social con cárceles sustentables, es decir, que los reos realicen tareas desde producir sus propios alimentos hasta mantenimiento de la infraestructura. De acuerdo con el autor, de aplicarse la fórmula, a partir del segundo año bajaría el costo de la inseguridad, alcanzando en el quinto solo el equivalente a 0.5% del PIB. La pesadilla del gobierno que llegue al relevo.

COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Mayo 29 del 2018

Gasolinas, sin subsidio, pero con apapacho fiscal

Los precios de las gasolinas se fijan por factores internacionales, independientemente de que ese precio lo pague el consumidor o un gobierno con recursos públicos. Incluso, un país que pudiera producir 100% de sus energéticos paga un costo si decide vender esos productos por debajo de sus costos de mercado, y ni hablar si decide venderlos por debajo de sus costos de producción.

Durante décadas se reforzó el cuento de Pemex como la empresa de todos los mexicanos con un enorme subsidio a los precios de los energéticos, principalmente las gasolinas. El gobierno federal compensaba la baja productividad, la corrupción y el brutal traspaso de recursos de la petrolera con subsidios a los combustibles. Eso siempre fue un crimen, pero era muy cómodo para todos.

Los combustibles no deben tener precios subsidiados e incluso deberían pagar, como en muchas partes del mundo, impuestos altos ante su innegable aportación contaminante. Pero México es un país con una población que mayoritariamente percibe bajos ingresos y que ha recibido ese dulce envenenado de los subsidios durante muchas generaciones.

Era un hecho que cambiar esta desviación tan onerosa implicaría un costo político elevado. Al actual gobierno se le pueden buscar muchos muertos en el clóset, pero las reformas estructurales fueron grandes aciertos que hoy corren peligro. Una posible reversión de la reforma energética implicaría un derrumbe en la confianza del país, el uso de miles de millones de dólares en indemnizaciones y, por supuesto, una reversión del proceso de liberación de precios de los energéticos.

Dos de los tres candidatos presidenciales serios han propuesto regresar a un esquema de subsidios a las gasolinas. A quien le dan pan que llore, aunque en la realidad implique un costo enorme para todos regresar a la quema de dinero público para pagar un producto que usan unos cuantos. ¿Realmente alguien se preocuparía por el uso de 250,000 millones de pesos presupuestales al año para subsidiar las gasolinas si con ello se pueden tener litros de 14 o 15 pesos?

El actual gobierno renunció a la quema de dinero presupuestal en subsidios a las gasolinas, pero no se separó del sacrificio fiscal para matizar las consecuencias de un mercado libre y tan volátil como el de los energéticos. Ahora mismo, el gobierno federal utiliza un esquema de sacrificio fiscal que implica dejar de ingresar recursos por concepto del impuesto especial a los combustibles con tal de tener un amortiguador en el precio.

Pero la promesa es bajar los precios. Hay tres opciones para esos candidatos que lanzan el anzuelo populista: o baja el precio internacional del petróleo o usan recursos públicos para bajar artificialmente el precio del litro de gasolina o simplemente incumplen su promesa. Pero como la amenaza de caer en el pozo populista es real, hay un riesgo presupuestal importante por este tema y por tantos otros que en esa nublada visión de querer tener contento al pueblo bueno van a implicar un garantizado deterioro financiero del país.

ecampos@eleconomista.com.mx